

Así viven los pensionados en Venezuela

A los 84 años Julia Ochoa se mantiene con la ayuda de sus vecinos en Petare, al este de Caracas. Ellos se encargan de cuidarla, pues su único hijo murió en un accidente doméstico en 2019 y no hay más familia a la que acudir. Ha intentado volver a trabajar en varias ocasiones para poder ganar algo de dinero, pero su artritis no le deja hacer mucho.

Su pensión equivale a 3,6 dólares. Además, recibe un “bono de guerra” del gobierno de 600 bolívares (16 dólares). A inicios de 2024, esos casi 20 dólares mensuales no le sirven más que para comprar las medicinas para su tensión.

Es Felicia, una enfermera que vive en la casa contigua, quien le prepara las comidas y chequea a diario su estado de salud.

“Que malo es envejecer en este país. ¿Sabes qué es triste? Pasar trabajo de vieja. Si yo estoy viva es porque los vecinos son amigos y están pendientes de una. En diciembre me invitaron a comer el 24 y yo me puse a llorar porque no tenía ni para colaborarles con un refresco”, dijo Julia a **Efecto Cocuyo**.

Su situación se repite a lo largo del territorio nacional, donde hay un aproximado de cinco millones de jubilados y pensionados que a duras penas llegan a final de mes. En 2023, venezolanos de la tercera edad organizaron cientos de protestas, en especial en Caracas, sin obtener respuestas de las autoridades estatales.

Luis Cano, coordinador del **Frente Amplio Unido por los Jubilados y Pensionados**, recordó que en el país más de 80 % de las personas mayores no puede costear sus gastos. El 5 de enero de 2024 entregó un documento en la Fiscalía, para pedir que intervenga en el problema.

“Tú, cuando envejeces, lo más que quieres es cerrar tu ciclo de vida con dignidad, con acompañamiento. [Estas navidades fueron muy tristes](#). Esto no puede seguir así”, expresó Cano.

Qué hace una educadora jubilada

La profesora Ana Mancipe tuvo que hacer “malabares” para poder pagar el tratamiento de su hijo de 23 años, recientemente diagnosticado con dengue.

La mensualidad correspondiente a su jubilación tras 25 años de

servicio (500 bolívares) no le bastan para costear la hidratación, la alimentación y la vitamina C que necesita el joven.

“Cada potecito de suero eran prácticamente 200 bolívares. Menos mal que me lo atendieron en Salud Chacao, porque anteriormente fuimos al Magallanes (Hospital de los Magallanes de Catia) y eso era deprimente. Eso era una sola sala donde había entre 15 y 20 pacientes, en su mayoría viejitos”, contó Mancipe.

Hace tan solo 20 años, cuenta, ella habría podido costear una clínica privada para su hijo. Con su sueldo de maestra consiguió comprar un apartamento y un carro a principios del 2000, antes de que la crisis y la gestión deficiente acabara con el sistema educativo venezolano y con los salarios del sector.

“Qué me puede quedar de la jubilación. No cobro pensión todavía porque tengo 50 años y a los 55 es que me paga el Seguro Social. Con el bono de guerra y lo que yo gano es que pago el **condominio**. Nada más. Mis hijos prácticamente me mantienen, si fuera por mí no me mantengo. Somos una familia chiquita, yo soy hija única”, dijo Mancipe a **Efecto Cocuyo**.

En 2022, Convite advirtió que 67 % de jubilados y pensionados percibían entre 10 y 50 dólares mensuales. Para noviembre de 2023 la canasta alimentaria se ubicó en 19.314,47 bolívares (522,01 dólares), de acuerdo con el informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Sin posibilidades

“En Venezuela es normal que un pensionado y jubilado se muera solo, porque no puede costear sus medicinas y sus familiares han migrado”, explicó Cano.

En 2023, Luis Francisco Cabezas, director general de Convite, mostró preocupación por la falta de políticas públicas dirigidas a atender a los adultos de la tercera edad en el país. Indicó que para 2022 un 12 % de esa población vivía completamente sola.

“Estamos en pobreza extrema. En el año 2012, cuando arrancamos con nuestra lucha, había en el país 2 millones 300 pensionados y jubilados. En 2023 pasamos de cinco millones”, explicó Cano.

En agosto del año pasado, Provea advirtió que el presupuesto destinado a la inversión social en Venezuela fue de 7.529 millones de dólares, y a la protección y seguridad social 763

millones de dólares para “cubrir régimen prestacional de empleo, atención en centros de salud y prestaciones sociales irrisorias de 130 bolívares”.

La ONG denunció también que los bonos, otorgados por el gobierno de Maduro, no alcanzan para cubrir las necesidades de la población de adultos mayores.

“Estamos presos en nuestro propio país. Hemos llamado a esto un ‘cerco de exterminio’. No tenemos comida, medicina ni recreación. Muchos hermanos están en un apartamento solos, a la buena de Dios, con algún vecino o institución religiosa”, expresó Cano.

Irse en la vejez

El dirigente agregó que una decisión desesperada que están tomando algunos adultos mayores es irse del país, en especial cuando tienen algún familiar que los reciba en el exterior.

“Pero eso es muy complicado. Un joven tiene la fuerza para migrar, para empezar otra vez en otro país. El muchacho tiene la opción, porque tiene fortaleza física, la parte económica y el deseo. Nosotros no”, apuntó Cano.

No hay cifras oficiales de cuántos jubilados y pensionados han salido de territorio venezolano, debido a la crisis humanitaria compleja.

En septiembre de 2023, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab) afirmó que los migrantes mayores tienen dificultades para adaptarse a nuevos entornos o culturas y para insertarse en el mercado laboral.

Si bien algunos se reúnen con sus familias, varios deben asumir la tarea de cuidadores (especialmente aquellos que tienen nietos) sin recibir remuneración por sus tareas o con pagas mínimas.

En 2019, Human Rights Watch indicó en un informe que, en Argentina, 80% de migrantes de la tercera edad consultados no recibía pensión desde Venezuela, quedando bajo dependencia de sus familiares y convirtiéndose en una carga.

Cano puntualizó que en 2024 los jubilados esperan estar en la lista de prioridades del Estado y aseguró que no dejarán las calles hasta que sus reclamos sean atendidos con soluciones eficientes a corto plazo.

Con información de Efecto Cocuyo